

MENSAJES PRINCIPALES INFORME NACIONAL VOLUNTARIO 2021

La incidencia de la pobreza disminuyó en los primeros cuatro años de la Agenda 2030, tendencia que fue revertida (aumentó 2.1 pp) por la pandemia.

Los bajos niveles de productividad e ingresos de la actividad agropecuaria constituyen un importante reto en materia de seguridad alimentaria y mejora de las condiciones de vida de la población rural.

Los principales indicadores de cobertura de salud muestran reducidos avances (se intervinieron simultáneamente 57 hospitales) y aun se tienen retos de calidad del servicio.

El acceso a las vacunas y el fortalecimiento de los servicios de salud es vital para reducir los riesgos de prolongación y profundización de la crisis.

El país ha experimentado un alto crecimiento económico en las últimas décadas, la pandemia lo frenó abruptamente en el 2020. El PIB descendió 6.7%, siendo el turismo más afectado con reducción 62.7% de visitantes extranjeros y de 47.5% en valor agregado de hoteles, bares y restaurantes. Recuperar el crecimiento implica enfrentar múltiples desafíos, entre ellos: revisar modelo de desarrollo del sector, mejora condiciones laborales, impulsar desarrollo productivo, reducir la desigualdad, aumentar resiliencia al cambio climático y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

La tasa de desocupación ha descendido, pero aún tiene espacios de mejora para generar más y mejores empleos. Más de la mitad de la población ocupada trabaja en el sector informal. Se mantienen amplias brechas de acceso al mercado laboral de mujeres y hombres, grupos de edad y territorios.

La concentración del ingreso, medida por el coeficiente Gini, se ha reducido. Sin embargo, el país pierde más de la quinta parte en el IDH por desigualdad.

Permanecen brechas estructurales de desarrollo entre los territorios que están siendo abordadas. El país planifica políticas a mediano plazo con enfoque territorial.

Se cuenta con una Hoja de Ruta de Producción y Consumo Sostenibles, pero se enfrenta a desafíos de articulación y apropiación nacional. Los actores involucrados han presentado rezagos en su integración efectiva.

El país es muy vulnerable a fenómenos climatológicos. En el último quinquenio, aproximadamente 11% de la población ha sido afectada por huracanes, tormentas y vaguadas. El impacto negativo de las emisiones de CO2 y la huella material en el IDH del país se estima en alrededor de 4%.

La seguridad ciudadana y el acceso a justicia presentan desafíos. La tasa de homicidios muestra tendencia a la baja (más alta en hombres y jóvenes). No se evidencia avances hacia la erradicación del maltrato y la trata de personas, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres. Persisten barreras de acceso a la justicia, aunque ha mejorado notablemente la independencia del poder judicial.

Según cifras del 2019, los indicadores de institucionalidad muestran deterioro, principalmente la confianza en los partidos políticos y la percepción de la corrupción. Se ha acelerado la lucha contra la corrupción e impunidad.

Para enfrentar los grandes desafíos, tanto estructurales como emergentes, el país está transitando hacia un Estado con mayor fortaleza institucional. Además, procura mejorar sustancialmente la situación fiscal con un régimen tributario que garantice mayores ingresos con equidad y gasto público de calidad.

El crecimiento de la deuda pública, acelerado por el impacto de la Covid-19, ha comprometido una alta proporción del presupuesto al pago de intereses de un 17.4% del gasto del Gobierno Central de los últimos 5 años.

La generación de divisas depende fundamentalmente del turismo, las remesas y zonas francas. Estos venían creciendo a un buen ritmo frenado por la pandemia. Tanto las remesas como las exportaciones de zonas francas se han reactivado a niveles pre-covid. Por su parte, las exportaciones han presentado un escaso dinamismo. Se esperan mejoras de este rubro con las políticas públicas vigentes.

El fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional es clave para enfrentar los desafíos y superar problemas como los señalados, mucho más ahora, ante la urgente necesidad de mitigar las repercusiones de la pandemia. Los organismos multilaterales son esenciales para conseguir un reperfilamiento de la deuda pública consolidada.

El nivel de alineación de los ODS con la planificación nacional es alto (88%). Se está procurando su integración plena a través de la planificación de mediano plazo, aunque se requiere avanzar hacia el cierre de brechas entre lo planeado y lo ejecutado.